



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

<b>Medio de control:</b>	Nulidad y restablecimiento del derecho –lesividad–
<b>Demandante:</b>	Administradora Colombiana de Pensiones
<b>Demandado:</b>	Blanca Myriam Buitrago Pérez
<b>Radicación:</b>	15001 3333 004 <b>2018 00088 00</b>

### ASUNTO

Visto el informe secretarial que antecede, la demanda se encuentra para resolver la medida cautelar solicitada por la entidad demandante. No obstante, advierte el Despacho que carece de jurisdicción para conocer el asunto.

### ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones incoó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, buscando la nulidad de la Resolución N.º GNR 398406 de 10 de diciembre de 2015, mediante la cual con ocasión del fallecimiento del señor Juan Federico Gómez Estupiñán, se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a favor de la señoras Blanca Myriam Buitrago y Laura Natalia Gómez Salinas, en calidad de esposa o compañera permanente e hija, respectivamente.

Revisado el plenario, en especial, la Resolución N.º GNR 280846 de 14 de septiembre de 2015, por la cual se NIEGA una pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado (CD f. 40), se observa que el señor Juan Federico Gómez Estupiñán, al momento de su muerte, laboraba para la Universidad de Boyacá y que la totalidad de sus servicios los prestó en el sector privado.

### CONSIDERACIONES

#### **- Competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.**

El artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 establece que a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

En materia de controversias laborales, el numeral 4.º de dicha norma establece que son competencia de esta jurisdicción los procesos “... *relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público*”

No obstante, numeral 4.º del artículo 105 *ibidem*, excluye, expresamente, del objeto de esta jurisdicción todos aquellos conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y los trabajadores oficiales.

Por tanto, estas normas determinan que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, únicamente, conocerá las controversias relativas a la seguridad social suscitada entre los servidores públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria y una entidad administradora del sistema, siempre y cuando, esta sea de derecho público, luego, si el acto administrativo se deriva, directa o indirectamente, de un contrato de trabajo, esta Jurisdicción no sería competente.

La anterior conclusión, es reafirmada por los artículos 152 y 155 del CPACA, al regular que los tribunales y juzgados de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conocen de los procesos de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo.

#### **- Competencia de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y seguridad social**

Por su parte, a la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Laboral y Seguridad Social le corresponde el conocimiento de todos los conflictos que tengan un origen ya sea de forma directa o indirecta en un contrato de trabajo<sup>1</sup>, sin importar la clase de empleador involucrado.

Asimismo, el numeral 2.º del artículo 4.º Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 1564 de 2012, le otorga, específicamente a dicha jurisdicción el conocimiento de “*Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.*”

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que la jurisdicción ordinaria laboral puede pronunciarse sobre la legalidad del reconocimiento de un derecho derivado de la relación laboral o de la seguridad social, independientemente, de la forma en que este se produzca, toda vez que:

---

<sup>1</sup> Numeral 1.º del artículo 1.º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social

“a- Es natural que la jurisdicción ordinaria conozca de las controversias que proponen los trabajadores del sector privado afiliados a una entidad de previsión social, por ejemplo, una AFP, cuanto se reconoce o niega un derecho pensional. Cuando la AFP es privada, ese reconocimiento se produce a través de acto privado, sin embargo, cuando es pública como lo es Colpensiones, este se hace naturalmente a través de acto administrativo – resolución -.

En ambos casos el control sobre la legalidad del reconocimiento prestacional recae en el juez de la seguridad social, previamente asignado por el legislador, con independencia de la forma en que se adoptó la decisión.

(...)

En efecto, es conocido que las administradoras públicas de régimen de seguridad social como Colpensiones y el antiguo ISS siempre deciden y han decidido las prestaciones de sus afiliados a través de actos administrativos – resoluciones -. Lo propio sucede cuando las entidades públicas de todos los órdenes, reconocen o niegan derechos laborales y prestacionales a los trabajadores oficiales.

Es decir, por el solo hecho de que estos derechos y prestaciones se decidan negativa o positivamente a través de actos administrativos, no muta o cambia la jurisdicción competente para conocer de la controversia. De ahí que sea la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la competente para decidir sobre estos conflictos, en cuyo caso el juez laboral, mediante sentencia reconoce o niega el derecho u ordena los pagos y compensaciones a que haya lugar, sin necesidad de anular el acto administrativo que negó o reconoció el derecho.

En resumen, en los conflictos originados de las relaciones laborales y con la seguridad social **la competencia se define por combinación de la materia objeto de conflicto y el vínculo laboral, sin que sea determinante la forma de reconocimiento o negativa del derecho**, así:

JURISDICCIÓN	CLASE DE CONFLICTO	CONDICIÓN DEL TRABAJADOR VINCULO LABORAL
Ordinaria, especialidad laboral y seguridad social	Laboral	Trabajador privado o trabajador oficial
	Seguridad social	Trabajador privado o trabajador oficial sin importar la naturaleza de la entidad administradora

		<i>Empleado público cuya administradora sea persona de derecho privado</i>
<i>Contencioso administrativa</i>	<i>Laboral</i>	<i>Empleado público.</i>
	<i>Seguridad social</i>	<i>Empleado público solo si la administradora es persona de derecho público<sup>2</sup>.”</i>

**- De la acción de Lesividad.**

El Despacho debe resaltar que la denominada acción de lesividad carece de naturaleza autónoma, y para su ejercicio la entidad u órgano estatal deberá acudir a los mecanismos procesales que regula el respectivo estatuto procedimental, aunque, generalmente, lo hace a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. De ahí que, tradicionalmente, este concepto se asocie exclusivamente con este medio procesal.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado ha considerado *“incorrecto aseverar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de todos los casos en donde la entidad pública demanda la ilegalidad del derecho reconocido en un acto administrativo, porque pese a que el objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es dilucidar la legalidad de los actos administrativos, ello no significa que la forma de la decisión pueda variar los criterios y reglas de competencia fijados por el legislador, tal y como se indicó en capítulos precedentes”*.<sup>3</sup>

Por lo anterior el alto Tribunal, en la misma providencia, argumentó que, si bien, el artículo 97 del CPACA establece que la Administración considere que un acto administrativo es contrario a la Constitución y a la ley, y no logre obtener el consentimiento expreso del particular, deberá acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; esta norma no debe interpretarse en forma descontextualizada frente a la filosofía de la figura y el objeto de la jurisdicción, este último regulado en normas posteriores del mismo código — artículos 104-105—, pues la interpretación textual conllevaría a que *“dos jurisdicciones diversas, con postulados, estructura, procedimientos y facultades diferentes, puedan decidir sobre un mismo derecho subjetivo y respecto de un mismo régimen laboral o de seguridad social, con el único elemento diferenciador del juez natural del caso, consistente en la naturaleza de quién acude a demandar la decisión administrativa.”*

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, Magistrado: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, auto de 28 de marzo de 2019, expediente N.º 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857).  
<sup>3</sup> *Ibidem*

### CASO CONCRETO.

Como se señaló, la Administradora Colombiana de Pensiones solicitó la nulidad de la Resolución GNR N.º 398406 de 10 de diciembre de 2015, por medio de la cual revocó, parcialmente, la Resolución N.º 280846 de 14 de septiembre de 2014 y, en consecuencia, reconoció una pensión de sobrevivientes a las señoras Blanca Myriam Buitrago Pérez y Laura Natalia Gómez Salinas, en calidad de esposa o compañera permanente e hija del señor Juan Federico Gómez Estupiñán.

Así las cosas, revisada la Resolución N.º 280846 de 14 de septiembre de 2014, se encuentra que el causante laboró siempre para el sector privado, siendo su última empleadora la Universidad de Boyacá, institución de educación superior de carácter privado, luego, el señor Juan Federico Gómez Estupiñán estaba vinculado, a través de contrato de trabajo y no ostentó la calidad de servidor público, mucho menos la de empleado público; por consiguiente, la discusión que se suscita respecto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, escapa del conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa y corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral y Seguridad Social.

Ahora bien, para determinar quien ostenta la competencia del *sub lite* es necesario remitirnos al artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual, estipula que en los procesos contra las entidades del sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho a elección del demandante.

A su vez, el artículo 12 *ibídem* determina que los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, conocen, en única instancia, de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Así las cosas, la estimar que COLPENSIONES cuenta con sede en la ciudad de Tunja, y que la demanda se interpuso en el 2018 y la cuantía ascendía a \$28.450.312,54, es claro que el proceso debe remitirse a los Juzgados Labores del Circuito de Tunja (reparto).

En mérito de lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Declarar que este Juzgado carece de jurisdicción para adelantar el presente proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Por secretaria, **remitir** el expediente por intermedio del Centro de Servicios de los juzgados Administrativos a la Oficina de Apoyo Judicial de esta seccional, para que sea sometido a reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito de Tunja.

**TERCERO:** **Dejar** las constancias y anotaciones pertinentes en el sistema de información judicial.

**Notifíquese y cúmplase**

  
**ÁNGELA MARIA JOJOA VELÁSQUEZ**  
**Juez**

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL  
CIRCUITO DE TUNJA  
NOTIFICACIÓN POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRÓNICO  
N° 37 De Hoy 02 de agosto de 2019  
A LAS 8:00 a.m.  
  
**FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ**  
SECRETARIO

<sup>4</sup>CZ

<sup>4</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 01 de agosto de 2019, en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co).  
Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario